

8 de enero de 2026

**Carta abierta al Primer Ministro Mark Carney:
Canadá debe tomar medidas urgentes con sus socios internacionales para oponerse a las
amenazas de Estados Unidos a los derechos, la soberanía y la paz en Venezuela y las Américas**

Estimado Primer Ministro:

Con la mayor urgencia, hacemos sonar la alarma por **el ataque militar ilegal y letal de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores**. En nuestra calidad de coalición que representa a 26 organizaciones canadienses de la sociedad civil con décadas de experiencia trabajando a favor de los derechos humanos y la justicia a la par de organizaciones socias en las Américas, conocemos muy bien las devastadoras consecuencias de la intervención militar estadounidense.

En este contexto, el silencio no es una opción. **Nos unimos al numeroso grupo de entidades y asociaciones en América Latina, el Caribe y otros lugares, que condena enérgicamente la operación militar estadounidense del 3 de enero, la intención declarada del presidente Trump de 'gobernar Venezuela' y vender el petróleo venezolano confiscado, sus amenazas registradas de enviar tropas estadounidenses a Colombia y México, y amenazas contra Cuba.**

Expertos de las Naciones Unidas han indicado que la operación militar estadounidense del 3 de enero y las amenazas del presidente Trump de una mayor intervención militar en Venezuela y en otras partes constituyen flagrantes violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y que sientan un precedente sumamente peligroso. Como declaró el 3 de enero la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Annalena Baerbock: « *La Carta de las Naciones Unidas no es opcional; es nuestro marco rector... El Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas estipula claramente que todos los Miembros de las Naciones Unidas se abstendrán, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. El respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional es la base del orden internacional. Un mundo pacífico, seguro y justo para todos solo es posible si prevalece el estado de derecho y no la ley de la fuerza*».

Hay mucho en juego, especialmente en nuestro hemisferio. No podemos hacernos ilusiones de que ningún país, incluido Canadá, esté a salvo si se permite que se cometan impunemente violaciones del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. El acceso a las reservas petroleras de Venezuela y a los recursos naturales de otros países es el claro objetivo de la administración Trump, a

pesar de las falsas narrativas que sigue difundiendo en un intento de intentar justificar acciones ilegales y violentas y amenazas de anexión.

El 4 de enero, los socios económicos y regionales de Canadá, México, Chile, Colombia, Brasil y Uruguay, junto con España emitieron un comunitario en el que *afirmaron “el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención”*. Llamaron a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, ante cualquier acción que atente contra la estabilidad regional y expresaron contra de “cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional”.

Canadá debe tomar medidas firmes, claras e inmediatas.

1. Instamos a Canadá a defender la Carta de las Naciones Unidas, condenando inequívocamente la intervención militar estadounidense en Venezuela, el secuestro del Presidente y la Primera Dama de Venezuela, la presunción de control estadounidense sobre los recursos venezolanos y otras graves violaciones de la soberanía y el derecho internacional que amenazan los derechos y la seguridad en la región.
2. Reiteramos con mayor urgencia los llamados de nuestra carta a los Ministros Anand, McGuinty y Sidhu, del 13 de noviembre de 2025, para que Canadá suspenda de inmediato el intercambio de inteligencia con EE. UU. a través de la Operación CARIBBE y que cierre la laguna legal que permite actualmente la exportación de material militar a EE. UU., a pesar del claro riesgo de que se utilice en operaciones militares que violan el derecho internacional y los derechos humanos. Nos consterna que, dos meses después, no hayamos recibido respuesta alguna de sus ministros a nuestra carta, a pesar de la gravedad de las violaciones y sus implicaciones para la paz en la región.
3. Instamos a Canadá a articular urgentemente una política sólida, independiente y basada en los derechos humanos que responda a la [Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025](#) de la administración Trump, que promete “reafirmar y aplicar la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental.” Nuestras organizaciones han presenciado y se han solidarizado con los pueblos de América Latina y el Caribe, ya que las administraciones estadounidenses anteriores utilizaron repetidamente la Doctrina Monroe para justificar invasiones, intervenciones y cambios de régimen liderados por la CIA en las Américas. La política exterior canadiense debe:
 - Centrarse en la primacía de la defensa de los derechos humanos en su totalidad, tal como lo exigen los tratados y pactos internacionales que Canadá ha firmado;
 - Afirmar la paz, la vida con dignidad y la justicia como valores no negociables;
 - Defender el derecho de los países a su integridad territorial y soberanía;
 - Defender el derecho de los pueblos a la libre determinación y a una vida libre del temor a la invasión.

El Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA) es una red nacional de organizaciones de la sociedad civil canadiense que trabajan por los derechos humanos y la justicia social y ambiental en América Latina y el Caribe. Reúne a ONG internacionales de desarrollo y ayuda humanitaria, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, grupos religiosos y de solidaridad, e instituciones de investigación.

Common Frontiers es una coalición nacional integrada por organizaciones sindicales, ambientalistas, religiosas y de justicia social centrada en las Américas. Damos visibilidad a las luchas de las organizaciones y comunidades con las que nuestros miembros mantienen relaciones duraderas en toda la región, y que trabajan para defender la democracia, los derechos humanos, los derechos laborales, los servicios públicos de calidad y el medio ambiente.